



Naciones Unidas

Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión

Asamblea General

Documentos Oficiales

Quincuagésimo séptimo período de sesiones

Suplemento No. 26 (A/57/26)

Asamblea General
Documentos Oficiales
Quincuagésimo séptimo período de sesiones
Suplemento No. 26 (A/57/26)

Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión



Naciones Unidas • Nueva York, 2002

Nota

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-2	1
II. Número de miembros, composición, mandato y organización de los trabajos del Comité	3-8	1
III. Temas examinados por el Comité	9-34	2
A. Normas sobre viajes establecidas por el país anfitrión	9-12	2
B. Exención fiscal	13-16	4
C. Transporte: uso de vehículos, estacionamiento y cuestiones conexas	17-34	6
IV. Recomendaciones y conclusiones	35	14
Anexos		
I. Lista de los temas sometidos a la consideración del Comité		16
II. Lista de documentos		17

I. Introducción

1. El Comité de Relaciones con el País Anfitrión fue establecido en virtud de la resolución 2819 (XXVI) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1971. La Asamblea, en su resolución 56/84, de 12 de diciembre de 2001, decidió incluir en el programa provisional de su quincuagésimo séptimo período de sesiones el tema titulado "Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión". Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 56/84.
2. El informe consta de cuatro secciones. Las recomendaciones y conclusiones del Comité figuran en la sección IV.

II. Número de miembros, composición, mandato y organización de los trabajos del Comité

3. El Comité está integrado por los 19 miembros siguientes:

Bulgaria	Federación de Rusia
Canadá	Iraq
China	Honduras
Chipre	Hungría
Costa Rica	Jamahiriya Árabe Libia
Côte d'Ivoire	Malasia
Cuba	Mali
España	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
Estados Unidos de América	del Norte
Francia	Senegal

4. La Mesa del Comité está integrada por el Presidente, los tres Vicepresidentes, el Relator y un representante del país anfitrión, que asiste de oficio a las sesiones de la Mesa. Durante el período que se examina, el Sr. Sotirios Zackheos (Chipre) continuó ocupando la Presidencia. Los representantes de Bulgaria, el Canadá y Côte d'Ivoire actuaron como Vicepresidentes y la Sra. Emilia Castro de Barish (Costa Rica) como Relatora.
5. La Asamblea General definió el mandato del Comité en su resolución 2819 (XXVI). En mayo de 1992, el Comité aprobó una lista detallada de los temas que se someterían a su examen, que se modificó ligeramente en marzo de 1994 y que se reproduce en el anexo I al presente informe.
6. Durante el período que se examina, el Comité celebró las sesiones siguientes: 210ª, el 21 de febrero, 211ª, el 28 de mayo; 212ª, el 4 de septiembre, 213ª, el 15 de octubre, y 214ª, el ___ de octubre de 2002.
7. El Grupo de Trabajo sobre el uso de vehículos diplomáticos, el estacionamiento y las cuestiones conexas, establecido en la 181ª sesión, no se reunió durante el período que se examina.
8. El Grupo de Trabajo sobre el endeudamiento, cuyo mandato consiste en examinar todos los aspectos del problema, no se reunió durante el período que se examina.

III. Temas examinados por el Comité

A. Normas sobre viajes establecidas por el país anfitrión

9. En la 210ª sesión, la representante de Cuba reiteró la posición de su Gobierno de que las restricciones a los viajes de los diplomáticos de ciertas misiones y nacionalidades iban en desmedro de la capacidad de esas misiones para desempeñar sus funciones. En particular, se refirió a la nota verbal de fecha 11 de marzo de 2002 dirigida a la Misión Permanente de los Estados Unidos de América por la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, relativa a la denegación por el país anfitrión de una solicitud de viaje por un día fuera del radio de 25 millas para asistir a una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, D.C. La representante de Cuba hizo hincapié en que esa reunión no era una actividad turística, sino una reunión oficial claramente “relacionada con las Naciones Unidas”. Recordó la resolución 55/245 B de la Asamblea General, de 25 de julio de 2001, relativa al proceso preparatorio de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, y también la función específica en ella atribuida a los bancos regionales de desarrollo como el BID. Hizo referencia al estatuto de observador de que disfrutaba el BID en la Asamblea General, y observó que los Estados Unidos habían copatrocinado la resolución que le había otorgado ese estatuto. La representante de Cuba dijo que el país anfitrión no había dado razón del porqué de esa denegación. Instó al país anfitrión a que examinase con más detenimiento esas solicitudes de conformidad con la letra y el espíritu del Acuerdo relativo a la Sede. El representante del país anfitrión respondió que la reunión había sido patrocinada por el BID y no por las Naciones Unidas. Hizo hincapié en que el Acuerdo relativo a la Sede sólo contenía obligaciones relativas a las reuniones de las Naciones Unidas. Los funcionarios de Cuba en Washington, D.C. habían podido representar a Cuba en dicha reunión.

10. En la 211ª sesión, el representante de la Federación de Rusia dijo que las demoras en la expedición de visados de los Estados Unidos para los representantes de ciertos Estados Miembros, incluida la Federación de Rusia, muchas veces disminuían su capacidad para participar en las reuniones de las Naciones Unidas. Si bien reconoció el derecho de los Estados Unidos a controlar la entrada en su territorio, en particular después del 11 de septiembre de 2001, el representante de la Federación de Rusia señaló que el plazo mínimo de tres semanas era extremadamente oneroso, porque las delegaciones de alto nivel muchas veces tenían que viajar con poco tiempo de aviso, y expresó la esperanza de que la Misión Permanente de los Estados Unidos resolviese la situación de manera que facilitase las actividades de su delegación en las Naciones Unidas. La representante de Cuba, refiriéndose a las restricciones a los viajes de nacionales y diplomáticos de su país, dijo que la política del país anfitrión tenía una motivación política y contravenía la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, el Acuerdo relativo a la Sede y otros instrumentos internacionales; reiteró el llamamiento de su Gobierno de que se levantasen enteramente las restricciones a los viajes. A ese respecto, la representante de Cuba señaló también que el país anfitrión aplicaba la política de denegar las solicitudes de viajes de los diplomáticos cubanos fuera del radio de 25 millas para participar en actividades organizadas por universidades e instituciones similares en relación con cuestiones vinculadas con la labor de las Naciones Unidas. En 2002, la Misión de Cuba había presentado tres solicitudes para participar en esas conferencias académicas y las tres habían sido denegadas. La representante de Cuba invitó al país

anfitrión a que revisase esa práctica. El Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas dijo que los diplomáticos libios también sufrían los efectos de esas restricciones a los viajes. El plazo de tres semanas para el otorgamiento de visados era ilógico, arbitrario e inaceptable. Los diplomáticos de las Naciones Unidas no venían a Nueva York como turistas o para violar las leyes del país anfitrión, sino que venían a Nueva York para desempeñar sus funciones y, por ende, se les debía tratar de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables, incluido el Acuerdo relativo a la Sede. El representante del Iraq, en relación con el otorgamiento de visados de entrada, se refirió a una nota verbal dirigida al Presidente del Comité por la Misión Permanente del Iraq (A/AC.154/351). Explicó que la denegación y demora de los visados para las delegaciones del Iraq se habían convertido en un verdadero impedimento al desempeño de sus funciones, contrariamente a las obligaciones asumidas por el país anfitrión en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y el Acuerdo relativo a la Sede. Instó al Comité a que velase por el cumplimiento de la obligación del país anfitrión de facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes de conformidad con el derecho internacional. El representante del país anfitrión reiteró que el Acuerdo relativo a la Sede sólo contenía obligaciones respecto de las reuniones de las Naciones Unidas. Las restricciones a los viajes, impuestas en virtud de la legislación nacional por razones de seguridad nacional, no afectaban el acceso o los viajes a las reuniones oficiales de las Naciones Unidas. Por ende, el país anfitrión no había violado sus obligaciones ni había conflicto entre esas obligaciones y los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Añadió que esas políticas eran objeto de un examen periódico.

11. En relación con el tema titulado “Otros asuntos”, en la 212ª sesión, la representante de Cuba informó de que el país anfitrión había denegado un visado de entrada al experto cubano de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, con lo que se había comprometido la integridad de la labor de la Comisión Consultiva. Además, informó de que también se le había denegado un visado a Eusebio Leal Spengler, Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de nacionalidad cubana, que había sido invitado oficialmente por el Secretario General a participar en una reunión de Embajadores de Buena Voluntad los días 18 y 19 de junio de 2002. La representante de Cuba protestó por esos incidentes, pues consideró que constituían infracciones del Acuerdo relativo a la Sede, e instó al país anfitrión a que reconsiderase su posición a la luz de sus obligaciones. El representante del Iraq destacó que, no obstante las tensiones negativas entre el país anfitrión y algunos Estados Miembros, esas tensiones no deberían ir en desmedro de los derechos y obligaciones internacionales conforme al Acuerdo relativo a la Sede. Protestó por la denegación de visados a la delegación del Iraq ante el décimo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Si bien el Iraq cumplía cabalmente los procedimientos de solicitud de visados, las demoras inaceptables impedían la labor de su misión, en contravención de la letra y el espíritu del Acuerdo relativo a la Sede. Pidió al Secretario General que intercediese ante las autoridades del país anfitrión para que facilitasen la labor de la Misión Permanente del Iraq, y pidió al Presidente del Comité que intercediese en relación con los visados para el quincuagésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. El representante de Zimbabwe planteó los problemas de su misión para obtener visados a fin de volver a entrar al país en caso de salidas de urgencia, por razones médicas o personales, e instó al país anfitrión a que instituyese un nuevo régimen para esos visados. El representante del país anfitrión

indicó que examinaría las cuestiones planteadas por los representantes de Cuba y Zimbabwe. En respuesta al planteamiento del representante del Iraq en relación con el décimo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, se remitió a la posición del país anfitrión enunciada en el documento A/AC.154/354.

12. En relación con el tema titulado “Otros asuntos”, en la 213ª sesión, la representante de Cuba protestó por la inaceptable demora en el otorgamiento de visados a dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores acreditados ante el quincuagésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Aunque las solicitudes de visado respectivas se habían presentado el 19 de agosto de 2002, la Misión de los Estados Unidos no había confirmado el recibo hasta el 11 de octubre de 2002, fecha para la cual ambos delegados se habían visto privados de asistir a una parte importante del período de sesiones. El país anfitrión observó que en esas solicitudes de visado se había dicho claramente que ambos funcionarios no tenían intención de llegar a Nueva York hasta el 6 de octubre de 2002.

B. Exención fiscal

13. En la 211ª sesión, el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas se refirió a sus cartas (A/AC.154/346, A/AC.154/347 y A/AC.154/348) relativas a las reclamaciones tributarias de las autoridades municipales de Nueva York respecto de las siete plantas de la Casa de Libia. Expresó su agradecimiento por las intervenciones claras y positivas de la Misión Permanente y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y destacó el interés de su país en la solución amigable del asunto de una vez por todas. Tras aceptar un ofrecimiento de diálogo de la Oficina del Comisionado de la Ciudad de Nueva York, la Jamahiriya Árabe Libia instó a las autoridades municipales competentes a que desistiesen de nuevos requerimientos tributarios y a que reconociesen el uso oficial de las siete plantas en cuestión. Acogiendo con beneplácito la intervención positiva de las autoridades del país anfitrión, el representante del Iraq declaró que la solución del asunto establecería un precedente que afectaría a todos los Estados Miembros y que el Comité debería continuar examinando de cerca la cuestión. La representante de Cuba, apoyando las reivindicaciones de Libia, que consideró justas y razonables, opinó que las prerrogativas que habían asumido las autoridades municipales aparentemente excedían sus facultades, y las instó a que resolviesen la cuestión de manera satisfactoria. El representante de Malí expresó su apoyo a un diálogo constructivo entre las partes, con la mira de lograr una solución positiva. El representante del país anfitrión dijo que los Estados Unidos continuarían cumpliendo sus obligaciones como país anfitrión y tratarían con diligencia de resolver todas las cuestiones planteadas por las misiones permanentes y el Comité de Relaciones con el País Anfitrión. Declaró que se había comunicado con la Comisión de la Ciudad de Nueva York respecto de esa cuestión y de la tributación de los bienes diplomáticos en general. Dijo que había escuchado atentamente a sus colegas, estaba dispuesto a reunirse personalmente con ellos y haría conocer esas preocupaciones en sus conversaciones con las autoridades municipales. El Presidente acogió con beneplácito el enfoque constructivo adoptado por la Misión Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia y la intervención positiva del país anfitrión. Expresó optimismo en cuanto a las perspectivas de una solución amigable y satisfactoria.

14. En relación con el tema titulado “Otros asuntos”, en la 211ª sesión, el representante de la Jamahiriya Árabe Libia planteó también el asunto de los topes impuestos por el país anfitrión a las cuentas bancarias de la Misión de Libia. Informó de que la Misión Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia había planteado la cuestión a la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en el plano bilateral, pero que el país anfitrión no había respondido de manera constructiva. Aludió a la pérdida del derecho de voto de Libia en la Asamblea General y a los procedimientos engorrosos, las necesidades presupuestarias y las pérdidas cambias que entrañaba la transferencia constante de fondos a las cuentas restringidas. Instó al país anfitrión a que levantase las restricciones o, al menos, que elevase el tope. Protestó también porque Libia no pudiese utilizar la residencia oficial, ya que se encontraba fuera del radio de 25 millas que tenían autorizado los representantes de su Gobierno. El representante de Malasia expresó preocupación por que las restricciones impuestas por el país anfitrión eran arbitrarias, e instó al país anfitrión a que considerase la posibilidad de levantar los topes aplicados a las cuentas bancarias de la Jamahiriya Árabe Libia. La representante de Cuba dijo que las restricciones impuestas a las cuentas bancarias de Libia entorpecían el desempeño de las funciones de la Misión de Libia, en contravención de las obligaciones que tenía asumidas el país anfitrión y debían levantarse. El representante del país anfitrión reconoció que la Misión Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia había solicitado un aumento de los topes aplicados a las cuentas bancarias de la Misión e informó de que la solicitud había sido objeto de un detenido examen por parte de altos funcionarios. Luego de ese examen, el país anfitrión había determinado que, por el momento, no había razón para aumentar los topes o levantar las restricciones. Los topes, a su juicio, eran suficientemente elevados y Libia tenía derecho a reponer constantemente sus cuentas dentro de esos topes. Por último, dijo que se realizaban y se seguirían realizando exámenes periódicos y que, por ende, se volvería sobre el asunto. El representante de la Jamahiriya Árabe Libia dijo que las observaciones del representante del país anfitrión no respondían de manera adecuada a los problemas que se le planteaban a su misión, en particular las dificultades para pagar la cuota de las Naciones Unidas y las cuentas, gastos de conservación y sueldos del personal. La Misión Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia usaba y continuaría usando sus dólares conforme a derecho y con cabal observancia de las leyes y la seguridad nacional del país anfitrión. Exhortó al Comité a que buscara una solución al problema.

15. En relación con el tema titulado “Otros asuntos”, en la 212ª sesión, el representante de la Jamahiriya Árabe Libia volvió a la cuestión de la tributación de la Casa de Libia para agradecer al Embajador Kennedy de la Misión Permanente de los Estados Unidos por su intervención ante la Comisión de la Ciudad de Nueva York. El representante del país anfitrión dijo que le complacía informar de que la Comisión de la Ciudad de Nueva York había aceptado la posición expuesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que, por lo tanto, la Misión Permanente de los Estados Unidos consideraba concluido el asunto. El observador de Egipto indicó que su Misión había recabado la asistencia de la Misión Permanente y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para obtener un reembolso de las autoridades municipales competentes de los impuestos que Egipto había pagado bajo protesta. El representante del país anfitrión dijo que continuaría instando a la Ciudad de Nueva York a que reembolsase esos impuestos a Egipto. El representante de Hungría informó de que su Misión había tenido un litigio de larga data en relación con las moras tributarias y expresó su agradecimiento por la asistencia y orientación que había recibido de la Misión Permanente de los Estados Unidos. Encomió

las recientes intervenciones y medidas decisivas que habían adoptado las autoridades del país anfitrión, y expresó la esperanza de que el nuevo ímpetu manifestado por la Misión Permanente de los Estados Unidos sirviese para resolver satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con la tributación.

16. En relación con el tema titulado “Situación de las transacciones bancarias de Cuba vinculadas con las cuentas bancarias de las Naciones Unidas para el pago de su cuota”, en la 214ª sesión, la representante de Cuba informó de que su misión había recibido una notificación de CIBC, un banco canadiense con domicilio en Toronto, al que se había encomendado efectuar los pagos de las cuotas de Cuba en las Naciones Unidas con destino a las cuentas bancarias de las Naciones Unidas, de que JP Morgan Chase Bank no recibiría pagos procedentes de Cuba debido al bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba. La Misión de Cuba había solicitado a la Misión de los Estados Unidos que adoptase las medidas necesarias para restablecer el movimiento normal de los fondos de Cuba con destino a las cuentas bancarias de las Naciones Unidas. Señaló que era su deber denunciar al Comité esta clara violación del Acuerdo relativo a la Sede y de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades. El representante del país anfitrión destacó que el país anfitrión tomaba con gran seriedad su obligación de facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes. Deploró que, si bien el asunto se había producido nueve días antes, el 23 de octubre de 2002, la Misión de Cuba sólo hubiese señalado el asunto a la atención de la Misión de los Estados Unidos el día de la sesión. Suponía que el problema se debía a un error humano por parte de algún empleado de banco y dijo que se hubiese podido resolver rápidamente sin necesidad de recurrir al Comité si se le hubiese comunicado la cuestión oportunamente a la Misión de los Estados Unidos. En todo caso, la Misión de los Estados Unidos ya había adoptado providencias para investigar la situación. La representante de Cuba añadió que la Misión de Cuba sólo había sido informada del problema el día antes de la sesión.

C. Transporte: uso de vehículos, estacionamiento y cuestiones conexas

17. En la 212ª sesión, el representante del país anfitrión recordó que el Comité había pedido al país anfitrión que colaborase con la Ciudad de Nueva York a fin de formular un programa de estacionamiento transparente, no discriminatorio y compatible con el derecho internacional. Luego de las conversaciones entre la ciudad anfitriona y el país anfitrión, la Misión de los Estados Unidos se complacía en anunciar que habían convenido en un Programa de Estacionamiento de Vehículos Diplomáticos, que entraría en vigor el 1º de noviembre de 2002. Dijo que el Programa trataba de reducir la congestión, mejorar el tránsito y realzar la seguridad, así como también de facilitar las actividades oficiales de las misiones permanentes y de las Naciones Unidas mismas. Expresó su agradecimiento por las gestiones del Alcalde Bloomberg y dio seguridades al Comité de que el Programa tenía en cuenta y abordaba las opiniones y preocupaciones señaladas desde 1997 por el cuerpo diplomático de las Naciones Unidas, los Estados Miembros, el Comité de Relaciones con el País Anfitrión y la opinión jurídica del Asesor Jurídico, de 1997 (A/AC.154/307). Dijo que tenía la certeza de que el Programa estaba en un todo de acuerdo con las obligaciones asumidas por el país anfitrión conforme al derecho internacional. En particular, conforme al Programa, cada Misión recibiría: a) dos espacios de estacionamiento diplomático exclusivos, b) dos calcomanías intransferibles para “vehículos de servicio”,

que autorizarían a esos vehículos a estacionar en esos dos espacios, y c) una calcomanía para “vehículos de distribución”, que podrían colocar en un vehículo de su elección. El representante del país anfitrión observó que la ciudad anfitriona nunca había podido garantizar estacionamiento a cada uno de los casi 2.500 vehículos diplomáticos y consulares registrados en Nueva York. Transmitió las seguridades de la Ciudad de que a los vehículos no diplomáticos que se estacionasen en los espacios reservados para las misiones se les expedirían avisos de infracción y que se despacharía el primer camión de remolque disponible para retirarlos del lugar. Advirtió, también, que si las misiones o sus diplomáticos no impugnaban o pagaban los avisos de infracción que se les expediesen con posterioridad al 1º de noviembre de 2002, los espacios de estacionamiento exclusivos y las calcomanías correspondientes se reducirían en uno (después de 40 avisos de infracción) y luego en dos (después de 65 avisos de infracción). Las misiones permanentes podrían impugnar los avisos de infracción en un régimen voluntario de solución de diferencias en virtud del cual la Ciudad crearía grupos de examen y recurso especiales para diplomáticos, que entenderían en los litigios sobre avisos de infracción expedidos a diplomáticos. Se establecería un programa de formación para oficiales de policía y agentes de tránsito. En cuanto a los avisos de infracción expedidos entre el 1º de abril de 1997 y el 31 de octubre de 2002, instó a las misiones a que se acogiesen al ofrecimiento de la Ciudad de pagar los avisos de infracción pendientes con una quita considerable. Por último, confirmó que muchos países observaban las normas reglamentarias sobre estacionamiento y que esperaba que el Programa de Estacionamiento de Vehículos Diplomáticos eliminase el problema del estacionamiento como causa de tensión en las relaciones con la ciudad anfitriona y como impedimento a la labor de las misiones.

18. La Comisionada de la Ciudad de Nueva York destacó que el Alcalde y la Ciudad tratarían siempre de proteger la seguridad pública y de facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes. El Programa era un medio importante para conciliar esos dos objetivos importantes.

19. El representante de Costa Rica agradeció a los representantes del país anfitrión y de la Ciudad y propuso que el Comité solicitase al Asesor Jurídico que presentase una opinión jurídica sobre el Programa y su conformidad con las obligaciones asumidas por el país anfitrión en virtud del derecho internacional, incluidos la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, el Acuerdo relativo a la Sede y la Convención de Viena. Los representantes de China, Côte d'Ivoire, Cuba, la Federación de Rusia y la Jamahiriya Árabe Libia y los observadores de Benin, el Brasil, Egipto, Ghana, Kuwait, el Pakistán, la República Árabe Siria, Singapur, Zambia y Zimbabwe apoyaron la solicitud de una opinión jurídica.

20. Además, el representante de Côte d'Ivoire confirmó que, según la Convención de Viena, los diplomáticos debían respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor e indicó que las misiones permanentes no tenían intención de faltar a sus obligaciones. Le preocupaba que el país anfitrión presentase lo que se podría considerar un hecho consumado. Observó que el Programa de Estacionamiento de Vehículos Diplomáticos se había presentado en fecha cercana al quincuagésimo séptimo período ordinario de sesiones y, para que hubiese oportunidad suficiente de examinarlo, pidió que el país anfitrión aplazase la fecha de su entrada en vigor. El representante de la Federación de Rusia dijo que el Programa estaba “bien encaminado”, pero, tras un análisis preliminar, se podría decir que tenía por finalidad aplicar ciertas sanciones que podrían contravenir el derecho internacional; en consecuencia, destacó que el Programa, como su predecesor, debía ser objeto de un

detenido análisis jurídico en cuanto a las prerrogativas e inmunidades de las misiones permanentes y las obligaciones del país anfitrión. La representante de Cuba observó que había habido una gran mejora en comparación con el programa de estacionamiento de 1997, pero planteó serias cuestiones respecto de algunos elementos del actual Programa que, al parecer, entraban en la categoría de medidas de ejecución y sujetarían a las misiones permanentes a la jurisdicción de la ciudad anfitriona. El representante de la Jamahiriya Árabe Libia declaró que era “bastante arbitrario” presentar el Programa con tan poca antelación, cuestionó la legalidad de la pérdida de espacios de estacionamiento y la no renovación de las placas diplomáticas y destacó que no todos los avisos de infracción que se expedían eran válidos. El representante de China hizo ver la brecha entre los espacios de estacionamiento disponibles y las necesidades de las misiones permanentes, y opinó que los procedimientos de examen y recurso del Programa y las nuevas restricciones al derecho de las misiones permanentes a utilizar sus vehículos con fines oficiales eran contrarias al derecho internacional y entorpecerían el desempeño de las funciones de las misiones permanentes, en violación del artículo 25 de la Convención de Viena. Expresó la esperanza de que la Misión Permanente de los Estados Unidos conjugase esfuerzos con los Estados Miembros para resolver amigablemente la cuestión, con la mira de velar por que el Programa no violase el derecho internacional ni fuese en desmedro de los derechos y obligaciones de las misiones permanentes.

21. El observador del Brasil, refiriéndose a serios problemas en el Programa, insistió en la obligación del país anfitrión de facilitar la labor de las misiones permanentes. El observador de Ghana, reconociendo el deber de los diplomáticos de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, destacó que ese deber no iba en desmedro del estatuto, las prerrogativas y las inmunidades de los diplomáticos conforme al derecho internacional. El observador de Benin expresó la preocupación de que se estuviese presentando el Programa como un hecho consumado. El observador de Egipto manifestó inquietud en cuanto a la legalidad de las sanciones administrativas y pecuniarias Programa. El observador de Kuwait confirmó que su misión daba instrucciones estrictas a sus choferes y diplomáticos de respetar las leyes y reglamentos locales, pero señaló que el abuso nominal de algunos no debía justificar un programa que podría resultar lesivo del derecho internacional. El observador del Pakistán dijo que esperaba un mejor trato de la ciudad anfitriona a la luz del hecho de que las misiones permanentes gastaban anualmente la suma de 6.000 millones de dólares en Nueva York; habida cuenta de la proximidad del período ordinario de sesiones de la Asamblea General y de la necesidad de estudiar el Programa y la opinión jurídica pertinente, sugirió que el asunto se aplazase hasta el siguiente año. El observador de la República Árabe Siria dijo que algunos elementos negativos del Programa podrían entorpecer el desempeño de las funciones de las misiones permanentes, contrariamente a las obligaciones del país anfitrión y de la prohibición de sanciones contenida en la Convención de Viena. Los observadores de Ghana, el Pakistán, Singapur y Zambia se hicieron eco de las preocupaciones de que la mayor parte de las violaciones se derivaba de la insuficiencia de espacios de estacionamiento y del uso de doble estacionamiento frente a las misiones; instaron a que se encarase el problema con un criterio más amplio y destacaron que los diplomáticos eran miembros respetuosos de la ley en la comunidad neoyorquina, cuyos privilegios e inmunidades se debían respetar cabalmente. El observador de Zimbabwe, expresando su agradecimiento por las iniciativas del país anfitrión con la mira de resolver los problemas de estacionamiento en Nueva York, insistió en que el verdadero problema era la expedición de avisos de infracción inválidos.

22. El representante del país anfitrión dijo que el Programa era “un gran paso adelante” que tenía en cuenta las deliberaciones del Comité y de su Grupo de Trabajo, las reuniones bilaterales con los Estados Miembros y la opinión jurídica dada por el Asesor Jurídico en 1997. Aunque estaba dispuesto a analizar o aclarar las disposiciones del Programa, recordó que éste entraría en vigor el 1º de noviembre de 2002. Destacó el ofrecimiento de la Ciudad de garantizar dos espacios de estacionamiento a cada misión. Recordó que el Alcalde mismo había observado las ventajas económicas y políticas que se derivaban para la ciudad de Nueva York de contar con la presencia de la comunidad diplomática. Con respecto a la jurisdicción de las autoridades locales, recordó que recurrir a los grupos de examen y recurso no significaría una renuncia a las prerrogativas e inmunidades y que las misiones permanentes podrían recurrir a las notas verbales y a las notas diplomáticas dirigidas a la Misión Permanente de los Estados Unidos, en lugar de utilizar los formularios municipales. Insistió en que la ciudad anfitriona haría todo lo posible por retirar los vehículos que violasen los espacios reservados a las misiones y que la reducción de espacios y la no renovación o no expedición de placas de registro sólo se plantearían si los diplomáticos no pagaban sus avisos de infracción válidos o no impugnaban los inválidos. También hizo ver que el remolque de vehículos estaba autorizado para proteger la salud y la seguridad públicas. Por último, recomendó que las misiones permanentes considerasen seriamente el ofrecimiento del Municipio de hacer una quita importante sobre las multas pendientes de pago.

23. El Presidente dio por concluido el debate observando que había sido animado e interesante. Tras determinar que había consenso en el Comité en favor de la propuesta del representante de Costa Rica de que se solicitase una opinión jurídica, el Presidente pidió al Asesor Jurídico que presentase una opinión jurídica sobre la conformidad del Programa con el derecho internacional.

24. En la 213ª sesión, el Asesor Jurídico presentó la opinión jurídica que figura en el documento A/AC.154/358. Con el mismo ánimo del Alcalde la Ciudad de Nueva York y del Secretario General de las Naciones Unidas, en cuanto al mutuo beneficio de las buenas relaciones entre la ciudad anfitriona y la comunidad diplomática, expresó la esperanza de que la comunidad diplomática ayudase a la ciudad anfitriona a resolver el problema del estacionamiento y de que la ciudad y el país anfitriones velasen por que sus autoridades competentes respetasen las prerrogativas e inmunidades de las misiones permanentes. Reiteró la conclusión enunciada en su opinión de que, si bien las disposiciones normativas del Programa de Estacionamiento de Vehículos Diplomáticos no daban lugar a ninguna objeción desde el punto de vista del derecho internacional, en última instancia la legalidad del Programa dependería de la manera en que se lo aplicase en la práctica. Por lo tanto, recomendó que el Comité examinase y evaluase el funcionamiento efectivo del Programa una vez transcurrido un plazo razonable. Instó a la ciudad anfitriona a que velase por que los agentes de tránsito y de policía aplicasen debidamente el Programa, de buena fe, con justicia y sin discriminación.

25. El representante del país anfitrión dijo que la Misión Permanente de los Estados Unidos se había sustentado ampliamente en la opinión jurídica de 1997 al elaborar la normativa del Programa y, por ende, no le sorprendía que el Asesor Jurídico hubiese concluido que no planteaba objeciones desde el punto de vista del derecho internacional. Concordó en que, en último análisis, el éxito de un programa de estacionamiento dependía de su aplicación cabal, equitativa y no discriminatoria. El país anfitrión estaba muy interesado en la comunidad diplomática y, conforme a su

obligación de facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes, velaría por que el Programa se aplicase de buena fe, en los planos federal y local. El Programa entraría en vigor el 1º de noviembre de 2002 y para esa fecha se habría impartido formación inicial a los agentes de tránsito y de policía. El representante del país anfitrión dijo también que los Estados Miembros debían guiarse por el principio de “impugnar o pagar”. A continuación pasó a ocuparse de las aclaraciones que se habían solicitado respecto de la opinión jurídica. En cuanto al párrafo 13 sobre los espacios de estacionamiento en las residencias privadas de algunos de los representantes permanentes, destacó que, para evitar discriminación entre los miembros, la ciudad y el país anfitriones no podían asumir ningún compromiso al respecto. Aludió a la posibilidad de que, caso por caso, fuese posible considerar la transferencia de uno de los espacios de estacionamiento de una misión a la residencia del representante permanente. En cuanto a los plazos mencionados en el párrafo 18 de la opinión jurídica, dijo que, si un aviso de infracción no había sido atendido dentro de un plazo de siete días, se lo daría por no atendido; si se recurría ese aviso entre los 8 y 30 días de su expedición, ya no se lo consideraría no atendido. En el caso de “abuso” del proceso de examen o recurso, la Misión Permanente de los Estados Unidos señalaría el asunto a la atención del representante permanente interesado. Respecto del párrafo 29, confirmó que se habían eliminado del Programa distribuido en la nota verbal de su Misión, de fecha 24 de septiembre de 2002, las referencias a “suspensión”. Por último, respecto del párrafo 30 de la opinión jurídica, el representante del país anfitrión confirmó que no habría un régimen de obligaciones o normas imperativas y que el Programa no disponía que se impusiesen multas o se cargasen intereses en relación con los avisos de infracción válidos. En caso de desacuerdo, la Misión Permanente de los Estados Unidos intercedería ante la Ciudad y la misión permanente interesada. El representante del país anfitrión confirmó que la mayoría de las misiones habían cumplido cabalmente sus obligaciones e instó a las pocas misiones que todavía tenían avisos de infracción pendientes de pago a que llegasen a un arreglo razonable con la Ciudad siempre que los avisos en cuestión hubiesen sido expedidos válidamente. Reconoció que, si bien el Programa podía ser conforme al derecho, se lo podría considerar inconveniente. A ese respecto, mencionó el párrafo 39 de la opinión jurídica que señalaba que, dada la realidad imperante en Manhattan, sería difícil discrepar con la opinión de que el estacionamiento gratuito en la calle era más bien un privilegio que un derecho dimanante de las declaraciones generales sobre facilitación contenidas en la Convención de Viena y en el Acuerdo relativo a la Sede.

26. El representante de Côte d’Ivoire se refirió a la distinción entre las perspectivas jurídicas y prácticas. Los diplomáticos tenían el deber, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y éste tenía la obligación de facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes. Era cuestionable la conclusión de que la legalidad del Programa dependiese de la forma en que se lo aplicase. A ese respecto, cuestionó la distinción que hacía la opinión jurídica entre la norma y su aplicación. La no renovación y no expedición de chapas diplomáticas eran medidas de ejecución ilegales que violaban tanto la inmunidad de los diplomáticos como los derechos de propiedad de las misiones permanentes y su personal. En particular, hizo ver que un vehículo diplomático sin chapas diplomáticas podría ser registrado, incautado o confiscado en contravención de la inmunidad de que disfrutaban esos vehículos por imperio de la Convención de Viena. El proceso de examen y recurso constituía un tribunal administrativo de cuya jurisdicción eran inmunes las misiones permanentes conforme al

derecho internacional; a su juicio, la presentación de los recursos por conducto de la Misión Permanente de los Estados Unidos no alteraba esa circunstancia. Desde un punto de vista práctico, los dos espacios de estacionamiento oficiales y un vehículo distaban de ser suficientes para cumplir las obligaciones del país anfitrión de facilitar la labor de las misiones permanentes, y observó que las misiones más pequeñas no podrían costear el gasto del estacionamiento comercial. Reconociendo que el país anfitrión tenía el derecho soberano de reglamentar el estacionamiento, el orador instó al país anfitrión a que aplazase la aplicación del Programa.

27. El representante de China indicó que su delegación no estaba en un todo de acuerdo con la opinión jurídica. El Programa distaba de ser adecuado para facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes. En particular, el representante de China objetó los arbitrios de no renovación y no expedición de chapas diplomáticas como violaciones de la inmunidad de los diplomáticos y como conculcación del derecho de uso y propiedad de sus bienes. Como los agentes y los bienes diplomáticos no podían ser objeto de actos judiciales, legislativos, administrativos o de ejecución, el representante de China dijo, a modo de conclusión, que la no renovación o no expedición de chapas diplomáticas era una medida de ejecución contraria al derecho internacional. Además, no obstante lo dispuesto en el párrafo 17 del Programa y de la oportunidad de impugnar los avisos de infracción mediante los buenos oficios de la Misión Permanente de los Estados Unidos, los grupos de examen y recurso en realidad sujetarían a las misiones permanentes a la jurisdicción de las autoridades locales. Instó al país anfitrión a que reconsiderase la entrada en vigor del Programa; de lo contrario, China estaba dispuesta a continuar insistiendo en el asunto e incluso, de ser necesario, a solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

28. La representante de Cuba informó de que, a pesar de las conclusiones enunciadas en la opinión jurídica, su país y otros Estados Miembros opinaban que el Programa contenía elementos incompatibles con ciertos principios fundamentales del derecho internacional. Muchas de sus disposiciones no sólo no facilitarían, sino que entorpecerían, la labor de las misiones permanentes. Concordaba con la opinión de que los procedimientos de examen y recurso sujetarían a las misiones permanentes a la jurisdicción civil del país anfitrión. Instó que se continuasen las consultas hasta que se llegase a un acuerdo sobre un programa que fuese congruente con las obligaciones del país anfitrión conforme al derecho internacional. A juicio de su delegación, varios elementos del Programa equivalían a medidas de ejecución que infringían las prerrogativas e inmunidades de los agentes diplomáticos.

29. El representante de la Federación de Rusia reconoció el derecho del país anfitrión a reglamentar el estacionamiento, pero exhortó a que se prosiguiese el diálogo entre todos los interesados y a que se procediese a un análisis jurídico más detenido antes de que el Programa entrase en vigor. La opinión jurídica no daba respuesta cabal a todas las inquietudes planteadas por las delegaciones. En particular, no abordaba la cuestión de lo que aparentemente era una sanción aplicada colectivamente a las misiones permanentes por el comportamiento de algunas personas. Observando la conclusión del Asesor Jurídico de que la aplicación del Programa podría tener consecuencias jurídicas que requiriesen un ulterior análisis, el representante de la Federación de Rusia instó a que se elaborase un programa de estacionamiento que, desde un principio, atendiese a todas esas preocupaciones. Opinó asimismo que la no renovación de las chapas diplomáticas constituiría una medida de ejecución

contraria a la Convención de Viena y al Acuerdo relativo a la Sede. Dio su apoyo sin reservas a la propuesta de que se aplazase la entrada en vigor del Programa.

30. El observador de Trinidad y Tabago, hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, instó al país anfitrión a que aplazase la aplicación del Programa para que se pudiesen celebrar otras deliberaciones sobre sus aspectos jurídicos y prácticos. El aplazamiento era necesario para conciliar las posiciones de los Estados Miembros y asegurar el respeto de las prerrogativas e inmunidades de las misiones permanentes y las obligaciones del país anfitrión conforme al derecho internacional. El observador de la República Islámica del Irán propugnó una solución jurídica mutuamente aceptable al problema de estacionamiento en Nueva York. Recordó que el derecho internacional reconocía dos principios fundamentales para orientar esas deliberaciones: que el país anfitrión estaba obligado a facilitar el desempeño de las funciones de las misiones permanentes y que los diplomáticos tenían la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades. En la medida en que los efectos del Programa sobre los espacios de estacionamiento en las residencias privadas de los representantes permanentes se debían elucidar mejor, que la asignación de sólo dos espacios por misión no satisfacía las plenas facilidades que requería la Convención de Viena y que la no renovación o no expedición de chapas diplomáticas constituía un impedimento a los movimientos y el desempeño de las funciones de los diplomáticos y las misiones permanentes, el observador de la República Islámica del Irán llegó a la conclusión de que el Programa no estaba en armonía con las obligaciones del país anfitrión conforme al derecho internacional. Además, destacó la arbitrariedad de aplicar el Programa a la mitad de la parte principal del quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. Apoyó cabalmente la propuesta de que se aplazase la entrada en vigor del Programa a fin de llegar a una solución mutuamente aceptable. El observador de Turquía se refirió a una relación de mutuo beneficio y responsabilidad común entre el país anfitrión y la comunidad diplomática y dijo que la presentación del Programa como hecho consumado no era apropiada en el contexto de esa relación. Dados los objetivos declarados del Programa de reducir la congestión y facilitar la labor de las misiones permanentes, el orador predijo que el Programa, si bien no mitigaría la congestión, incidiría negativamente sobre la labor de las misiones permanentes. El efecto del Programa sobre los espacios de estacionamiento residenciales y la no renovación de chapas diplomáticas planteaban cuestiones jurídicas que ponían en tela de juicio su conformidad con el derecho internacional. Por lo tanto, se hizo eco de la propuesta de que se aplazase su aplicación. El observador del Pakistán, observando que había una clara divergencia de opinión en cuanto a la legalidad del Programa, instó al Comité a que adoptase un criterio de familia y prescindiese de legalismos y expedientes técnicos. El observador de Egipto, hablando en nombre del Grupo de Estados Africanos, y los observadores de Benin, Indonesia y Malasia apoyaron las expresiones de oradores que los habían precedido y exhortaron a que se aplazase la aplicación del Programa.

31. El representante del país anfitrión dijo que había escuchado atentamente las preocupaciones expresadas por todas las delegaciones. Las cuestiones que se habían planteado eran fundamentalmente hipotéticas y se sustentaban en supuestos erróneos. Los pronósticos pesimistas sólo se harían realidad si grandes sectores de la comunidad diplomática no se conformaban al Programa. En realidad, sin embargo, sólo había unos pocos infractores. Aludiendo a las limitaciones físicas y a las realidades de la Ciudad de Nueva York, observó que la ciudad anfitriona sólo podía

garantizar dos espacios por misión. El Programa representaba un aumento de 20% en el estacionamiento diplomático disponible, además de los espacios en el garaje de las Naciones Unidas. Confirmó que no habría actos de registro, incautación o confiscación de vehículos diplomáticos, que los procedimientos de examen y recurso no constituían un sometimiento a la jurisdicción de la Ciudad y que, como había dicho el Asesor Jurídico, el Programa no daba lugar a medidas de ejecución ni suscitaba objeciones jurídicas desde el punto de vista del derecho internacional. Las consultas se venían celebrando desde 1997, con una amplia deliberación en el seno del Comité y su Grupo de Trabajo, y se había expedido una opinión jurídica sobre el anterior programa de estacionamiento. Con ese antecedente se habían definido las necesidades de estacionamiento de las misiones permanentes y se habían enunciado los parámetros jurídicos. Confirmó que el nuevo Programa atendía a todas las preocupaciones que se habían expresado en ese proceso y que, por ende, no se trataba en modo alguno de un hecho consumado. El país anfitrión, por lo tanto, había atendido a las necesidades expresadas por el Comité y su Grupo de Trabajo y había eliminado las incongruencias jurídicas que se habían señalado en la opinión jurídica de 1997. Confirmó que el Programa entraría en vigor el 1º de noviembre de 2002 y que, en consonancia con la opinión del Asesor Jurídico, sería necesario velar por su aplicación equitativa y no discriminatoria. Concordó en que debía proseguir el diálogo, pero sólo respecto de la forma en que se aplicase el Programa.

32. El representante de Côte d'Ivoire destacó que no deseaba politizar el asunto. Sin embargo, dijo que, luego de examinar el Programa y la opinión jurídica a su respecto, muchas delegaciones no estaban enteramente de acuerdo con todos los aspectos de la opinión jurídica. Las delegaciones habían señalado cuestiones jurídicas de peso, que se debían tener en cuenta. Instó nuevamente al país anfitrión a que informase a la ciudad anfitriona de que la comunidad diplomática solicitaba un aplazamiento de la aplicación del Programa. En respuesta, el representante del país anfitrión dijo que discutiría la cuestión con la Comisionada de la Ciudad de Nueva York, que había asistido a la sesión y oído todas las declaraciones que se habían hecho. Dijo que la respuesta del país anfitrión se distribuiría posteriormente mediante una nota diplomática.

33. El Asesor Jurídico confirmó que mantenía su opinión de que el Programa no daba lugar a objeciones jurídicas desde el punto de vista del derecho internacional. Destacó que había necesidad de supervisar su aplicación en la práctica, que había una fina distinción entre derecho y política sustantiva y que era menester tener en cuenta la función del Departamento de Estado. Instó una vez más a la ciudad anfitriona a que velase por que los agentes de tránsito y de policía aplicasen el Programa debidamente y de buena fe. El país anfitrión y la comunidad diplomática estaban a punto de encontrar una solución al problema del estacionamiento y abrigaba la esperanza de que, con el ánimo manifestado por el Alcalde y el Secretario General, se podría finalmente resolver el asunto.

34. El Presidente dio por concluido el debate, que calificó de animado y detallado y dijo que el Comité continuaría ocupándose de este tema de su programa.

IV. Recomendaciones y conclusiones

35. En su 214ª sesión, celebrada el 1º de noviembre de 2002, el Comité aprobó las siguientes recomendaciones y conclusiones:

a) El Comité reafirma el Acuerdo relativo a la Sede y las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 1946;

b) Considerando que el mantenimiento de condiciones adecuadas para las delegaciones y las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas redunda en interés de las Naciones Unidas y de todos los Estados Miembros, el Comité reconoce la labor realizada por el país anfitrión con ese fin y espera que todas las cuestiones planteadas en sus sesiones, incluso las cuestiones a que se hace referencia *infra*, se resuelvan debidamente con un espíritu de cooperación y de conformidad con el derecho internacional;

c) El Comité observa que el respeto de las prerrogativas e inmunidades es una cuestión de gran importancia. Subraya la necesidad de resolver, mediante negociaciones, los problemas que puedan plantearse a ese respecto para el funcionamiento normal de las delegaciones y misiones acreditadas ante las Naciones Unidas;

d) Teniendo en cuenta que la seguridad de las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas y la de su personal son indispensables para su funcionamiento efectivo, el Comité expresa su reconocimiento por la labor realizada por el país anfitrión con ese fin y espera que éste siga adoptando todas las medidas necesarias para impedir toda injerencia en el funcionamiento de las misiones;

e) El Comité toma conocimiento de la opinión del Asesor Jurídico de fecha 24 de septiembre de 2002 contenida en el documento A/AC.154/358, relativa al “Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos”, que figura en el documento A/AC.154/355, y de las posiciones expresadas sobre el asunto durante la 213ª sesión del Comité, celebrada el 15 de octubre de 2002, incluida la petición de muchos oradores de que se aplazase la aplicación del Programa de estacionamiento y el compromiso del país anfitrión de mantener condiciones apropiadas para el funcionamiento de las delegaciones y misiones acreditadas ante las Naciones Unidas de manera equitativa, no discriminatoria, eficiente y congruente con el derecho internacional;

f) El Comité pide al país anfitrión que continúe señalando a la atención de los funcionarios de la Ciudad de Nueva York las denuncias de la comunidad diplomática sobre casos de trato discriminatorio contra los diplomáticos, a fin de mejorar la situación y promover la observancia de las normas internacionales relativas a las prerrogativas e inmunidades diplomáticas y continuar las consultas con el Comité sobre estos importantes asuntos; y pidió al país anfitrión que señalase también a la atención de las autoridades municipales las posiciones expresadas por los miembros del Comité y por otros Estados Miembros sobre el “Programa de Estacionamiento de Vehículos Diplomáticos”;

g) Recordando la resolución 43/172 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988, el Comité destaca la importancia de una percepción pública positiva de la presencia y la labor de las Naciones Unidas, e insta a que se prosigan las gestiones encaminadas a sensibilizar a la opinión mediante una explicación, por todos los medios disponibles, de la importancia de la función desempeñada por las

Naciones Unidas y las misiones ante ellas acreditadas para el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales;

h) El Comité recuerda que, en virtud del párrafo 7 de la resolución 2819 (XXVI) de la Asamblea General, examinará las cuestiones que se planteen en relación con la aplicación del Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas y asesorará al país anfitrión sobre esas cuestiones;

i) El Comité espera que el país anfitrión siga haciendo expedir oportunamente visados de entrada a los representantes de los Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto en la sección 11 del artículo IV del Acuerdo relativo a la Sede, incluso para asistir a reuniones oficiales de las Naciones Unidas;

j) En lo concerniente a las normas sobre viajes establecidas por el país anfitrión respecto del personal de determinadas misiones y de funcionarios de la Secretaría de ciertas nacionalidades, el Comité insta nuevamente al país anfitrión a que elimine lo antes posible las restricciones relativas a los viajes que aún existen; en ese sentido, el Comité también observa las respectivas posiciones de los Estados Miembros afectados, el Secretario General y el país anfitrión;

k) El Comité destaca la importancia de que las misiones permanentes, su personal y el personal de la Secretaría cumplan sus obligaciones financieras;

l) El Comité acoge con beneplácito la participación de los Miembros de las Naciones Unidas en su labor y subraya su importancia. El Comité acoge con beneplácito también la participación de representantes de la Secretaría en sus trabajos. El Comité está persuadido de que su importante labor se ha beneficiado de la cooperación de todos los interesados;

m) El Comité desea reiterar su agradecimiento al representante de la Misión Permanente de los Estados Unidos encargado de los asuntos relativos al país anfitrión y a la Sección de Asuntos relativos al País Anfitrión de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, así como a las entidades locales, en particular a la Comisión de la Ciudad de Nueva York para las Naciones Unidas, el Cuerpo Consular y el Protocolo, que le ayudan en su labor de atender a las necesidades y los intereses de la comunidad diplomática y de promover el entendimiento mutuo entre dicha comunidad y los habitantes de la Ciudad de Nueva York.

Anexo I

Lista de los temas sometidos a la consideración del Comité

1. Cuestión de la seguridad de las misiones y de su personal.
2. Examen de las cuestiones que se plantean en cuanto a la aplicación del Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas y recomendaciones sobre esas cuestiones:
 - a) Visados de entrada expedidos por el país anfitrión;
 - b) Aceleración de los trámites aduaneros y de inmigración;
 - c) Exención de impuestos.
3. Obligaciones de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas y de su personal, en particular el problema de las reclamaciones respecto de obligaciones financieras y procedimientos que han de seguirse para resolver las cuestiones correspondientes.
4. Vivienda para el personal diplomático y el personal de la Secretaría.
5. Cuestión de las prerrogativas e inmunidades:
 - a) Estudio comparativo de las prerrogativas e inmunidades;
 - b) Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y otros instrumentos pertinentes.
6. Actividades del país anfitrión: asistencia a los miembros de la comunidad de las Naciones Unidas.
7. Transporte: uso de automóviles, estacionamiento y asuntos conexos.
8. Seguros, educación y salud.
9. Relaciones públicas de la comunidad de las Naciones Unidas en la ciudad anfitriona y la cuestión de alentar a los medios de información a que den publicidad a las funciones y la condición de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas.
10. Examen y aprobación del informe del Comité a la Asamblea General.

Anexo II

Lista de documentos

A/AC.154/346	Carta de fecha 21 de marzo de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas
A/AC.154/347	Carta de fecha 25 de marzo de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas
A/AC.154/348	Carta de fecha 24 de abril de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas
A/AC.154/349	Carta de fecha 16 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas
A/AC.154/350	Nota verbal de fecha 19 de abril de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por la Misión Permanente de Belarús ante las Naciones Unidas
A/AC.154/351	Nota verbal de fecha 20 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por la Misión Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas
A/AC.154/352	Carta de fecha 30 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Ministro Consejero para asuntos relacionados con el país anfitrión de la Misión de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas
A/AC.154/353	Nota verbal de fecha 15 de julio de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por la Misión Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas
A/AC.154/354	Nota verbal de fecha 30 de julio de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas
A/AC.154/355	Carta de fecha 26 de agosto de 2002 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas y Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión
A/AC.154/356	Nota verbal de fecha 27 de agosto de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por la Misión Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas

- | | |
|--------------|---|
| A/AC.154/357 | Carta de fecha 12 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas |
| A/AC.154/358 | Carta de fecha 24 de septiembre de 2002 dirigida a los miembros del Comité por el Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión |
| A/AC.154/359 | Carta de fecha 24 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el Ministro Consejero para asuntos relacionados con el país anfitrión de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas |
-